

misma Direccion de rentas del Estado sobre que esta se inhibiera de llevar adelante el remate de esas fincas embargadas, por estar ventilándose un juicio anterior sobre derechos de terceros en ellas, y que siendo el reclamo de esas contribuciones contencioso, remítase la Direccion al Juzgado referido ó al de 1ª instancia de Cuernavaca, el expediente para que en la via judicial se definiesen los derechos que el Estado alega. Visto el parecer fiscal; la sentencia del inferior otorgando el amparo y todo lo demas que de autos consta y se tuvo presente, y

Considerando: que desde el momento en que el cobro que se hace por las haciendas referidas á Perez Palacios se hizo contencioso, es incompetente la Direccion de rentas para ejecutarlo desde luego.

Que por lo mismo no pudo llevar adelante el remate de las fincas sin que previamente se definieran los derechos del Estado, por la autoridad judicial respectiva.

Que el cobro que se hace por rezagos líquidos de contribuciones, no goza de la facultad económico-coactiva.

Que con estos procedimientos se han violado en la persona del quejoso las garantías que reconocen los artículos que invoca; por estas consideraciones y por las propias en que se funda la sentencia del inferior, se decretar: que es de confirmarse y se confirma la referida sentencia, declarando: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Luis Perez Palacios, contra los procedimientos de la Direccion de rentas del Estado de Morelos, posteriores al embargo de las fincas mencionadas, dejándose á salvo los derechos de los interesados, en la jurisdiccion del Juez 2º de lo civil de México en los autos de que conoce.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia; publíquese archivándose á su vez el Tomo.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Supre-

ma de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazon*.—*Juan J. de la Garza*.—*José M. Lozano*.—*Ignacio Ramírez*.—*M. de Castañeda y Nájera*.—*Ignacio Altamirano*.—*Simon Guzman*.—*M. Zavala*.—*Lic. Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Mayo 8 de 1874.—*Enrique Landa*.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca por el C. español José Gomez, contra las disposiciones de la autoridad de Huajuapam, con cuya ejecucion se han violado las garantías individuales consignadas en los arts. 4, 14, 16 y 27 del Pacto federal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal, alegando para definitiva en el juicio de amparo promovido por el español D. José Gomez contra las providencias del ayuntamiento de Huajuapam, relativas al establecimiento de un arbitrio de tres centavos por la matanza de cada cabeza de ganado lanar ó cabrío, y contra los actos del C. Heimenegildo Leyva, presidente del referido ayuntamiento, dirigidos á hacer efectiva la cuota que al quejoso correspondia por la matanza verificada en su hacienda del Potrero, dice: El Juzgado me permitirá que haga una breve reseña de los hechos. En 5 de Octubre de 1873, el ayuntamiento de Huajuapam decretó el arbitrio municipal mencionado, previa la aprobacion del Superior Gobierno del Estado, y ese decreto vino á ser reformado por otro de Noviembre del mismo año, ó mejor dicho, aclarado y ampliado en el sentido de que las cabezas de ganado causarían el impuesto municipal, aunque la matanza se hiciera fuera del territorio ó demarcacion del mu-

municipio que la establecía. D. José Gómez hizo su matanza en la finca dicha del Potrero, ubicada fuera del territorio correspondiente á la demarcación municipal de Huajuapam, y esto no obstante, el agente municipal Hermenegildo Leyva, procedió á determinar la cuota que en su concepto correspondía pagar á Gómez, exigiendo á éste el pago de la misma, según la liquidación formada. El solicitante se resistió á pagar, y el agente municipal Leyva, en uso de las facultades económico coactivas de que se juzgó investido, procedió á secuestrar á Gómez, quien entonces solicitó el amparo de la justicia federal, y previamente la suspensión del acto reclamado que V. tuvo á bien decretar.

Recibido el negocio á prueba, el quejoso ha justificado: que su hacienda El Potrero se encuentra fuera de los límites del municipio de Huajuapam; que su ganado cabrio no ha pastado ni hecho posada en los terrenos del municipio dicho; y por último, que su matanza comenzó el 9 de Noviembre de 1873, y fecha del segundo acuerdo municipal referido. La cuestión, pues, á resolver, es la siguiente:

¿Pueden los Cuerpos municipales decretar impuestos ó arbitrios municipales fuera del territorio de su comprensión?

No es difícil ciertamente resolverla.

Los ayuntamientos que tienen el carácter de autoridad meramente local, no pueden ejercer sus funciones fuera de sus demarcaciones territoriales. Cualquier avance en ese sentido constituirá una usurpación sobre los municipios vecinos, investidos en sus territorios de idénticas facultades, y el ayuntamiento que procede á dictar procedimientos ó acuerdos de esa naturaleza, deja de hacerlo con facultades legales, y sus actos se convierten en atentatorios á todas luces, pues lo mismo significa carecer de facultades que extenderlas indebidamente.

Así es que, al resolver el ayuntamiento de Huajuapam que el ganado causara el arbitrio municipal decretado, aun haciendo-

se la matanza en el territorio de otro municipio, dió á sus facultades una extensión arbitraria, dejó de obrar en la órbita de sus atribuciones, y atacó, por lo mismo, la propiedad de los particulares que pudiera encontrarse en demarcación de otras municipalidades. Es claro entonces que por falta de facultades, el acuerdo mencionado de 9 de Noviembre viola en la persona del quejoso las garantías que otorgan los arts. 4, 16 y 27 de la Constitución federal de la República. No basta que se diga que se decreta un impuesto, es necesario además que se tenga facultad para ello; de otra manera bastaría dar á una derama ó exacción el nombre de *impuesto* para que fuera lícita y legal su cobranza, sin tenerse en cuenta, si quien tal hiciera estaba ó no investido de autorización legal para acordarlo.

Por lo que hace á la retroactividad del acuerdo de 9 de Noviembre, creo que teniendo el carácter de aclaratorio del de 5 de Octubre, no viola de ninguna manera la garantía del art. 14 constitucional, pues es bien sabido que las aclaraciones ó interpretaciones no causan efecto retroactivo, siendo además de notarse que la matanza de Gómez no se había hecho, ni era ya un hecho consumado, sino que solo comenzaba á hacerse cuando fué expedido el acuerdo aclaratorio de 9 de Noviembre.

Por lo expuesto, y en representación del Ministerio fiscal, concluyo pidiendo se ampare y proteja á D. José Gómez, por la violación que se ha hecho en su persona de las garantías concedidas por los arts. 4, 16 y 27 de la Constitución federal, con la expedición del acuerdo del ayuntamiento de Huajuapam de 5 de Octubre de 1873, aclarado por el de 9 de Noviembre del mismo año, y con los actos del Presidente municipal de aquel lugar, C. Hermenegildo Leyva, que han tenido por objeto hacer efectiva, conforme á los acuerdos dichos, la cuota que se dice correspondía al mencionado Gómez por su matanza en la hacienda del Potrero; y así mismo pido y suplico á V. se

sirva declarar que el amparo no es de concederse respecto de la retroactividad alegada contra el referido acuerdo de 9 de Noviembre de 1873.

Oaxaca de Juarez, Marzo 18 de 1874.

Es copia de su original que obra en el juicio respectivo á que me remito. Oaxaca de Juarez, Marzo 18 de 1874.—*José María Ballasteros.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Oaxaca de Juarez, Marzo 23 de 1874.—Visto el presente juicio de amparo promovido por el español D. José Gomez, vecino y del comercio de Huajuapam de Leon, contra el acuerdo del ayuntamiento de aquella cabecera de 5 de Octubre del año próximo pasado, y su correlativo aclaratorio de 9 de Noviembre siguiente, por los que se impuso arbitrio á las matanzas de ganado cabrío que se verificasen fuera de las demarcaciones de la misma cabecera, en cuya virtud se exige al quejoso el pago de cuatrocientos cuarenta y nueve pesos cuarenta y dos centavos, por su giro de matanza establecido en la hacienda del Potrero, extendiéndose el recurso á los actos de coaccion del C. Agente municipal dirigidos á hacer efectivo el pago de esa suma, por haberse violado las garantías de los arts. 4, 14, 16 y 27 de la Constitucion federal, hallándose comprendido el caso en la fraccion 1ª del art. 19 de la ley de 20 de Enero de 1869; visto el informe de la autoridad ejecutora del acto reclamado, que se contrajo primero á la suspension provisional pedida por el actor, y despues al punto principal, adjuntando copias de las piezas que justifican los acuerdos y procedimientos citados; vistas las pruebas rendidas por el quejoso; el pedimento fiscal; los alegatos de ambos y cuanto de autos consta. Resultando: que el Ayuntamiento de Huajuapam expidió en efecto los acuerdos de que se hace relacion en el curso (fojas 36 y 38) y que el pri-

TOMO VI.—PARTE II.

mero fué aprobado por la superioridad, por cuyos acuerdos se impuso la contribucion de tres centavos por cabeza de ganado cabrío que se matare en la cabecera de Huajuapam ó fuera de ella. Resultando: que habiéndose negado el quejoso á satisfacer la suma que le tocaba pagar por ese impuesto, se procedió al secuestro de bienes de su propiedad por medio de la facultad económico-coactiva, (fojas 41 y siguientes.)

Resultando de la prueba testimonial é informativa: que la matanza de que se trata se hizo en la hacienda del Potrero, sin hacer parada el ganado en terrenos de la municipalidad de Huajuapam, y que la expresada hacienda constituye hoy la municipalidad de San Sebastian del Progreso, por decreto de 22 de Enero de 1868, (fojas 51 y siguientes.)

Considerando: que en la actualidad bajo la forma que rige al país, la organizacion del poder municipal se halla perfectamente establecida y demarcada por la Constitucion y las leyes secundarias.

Considerando: que siendo ese poder esencialmente independiente de los poderes generales de la Soberanía del Estado, no podría subastir si no se circunscribiese á las funciones propias de su mision tutelar como entiendo, local y no política, y por lo mismo, debiendo ser bajo este aspecto cada municipio independiente de los demás, al tocar el acuerdo de un pueblo los intereses que se hallan bajo la jurisdiccion de otro pueblo, comete una verdadera usurpacion, y ni está en su derecho ni debe ser obedecido.

Considerando: que en confirmacion de esta idea, la Constitucion del Estado en su art. 65 establece un ayuntamiento para cada municipio con las atribuciones consiguientes á su jurisdiccion exclusiva y local, basandose sobre ese principio la facultad de acordar los impuestos generales y proporcionados que demanden sus atenciones, (ley del Estado de 11 de Noviembre de 1857, art. 33 y 25 fraccion 3ª) sin que

ninguna ley anterior á los ayuntamientos para estender sus acuerdos á jurisdicciones ajenas.

Considerando: que no siendo personal el impuesto en cuestion, la circunstancia de ser el quejoso vecino de Huajuapam, no autoriza al municipio de esa poblacion para gravar sus propiedades que no están bajo la proteccion de aquella autoridad, ni en términos de su jurisdiccion.

Considerando: que siendo aclaratorio el acuerdo de 9 de Noviembre del de 5 de Octubre y habiendose comenzado hasta aquella fecha la matanza sin haberse probado su prioridad, no se ha dado efecto retroactivo á ese acuerdo ni al anterior.

Considerando: que por lo expuesto, se han violado en la persona ó intereses del quejoso, las garantías de los arts. 4, 16 y 27, y no el 14 de la Constitucion federal.

Considerando por último: que no se ha cumplido aun en todas sus partes el auto que decretó la suspension provisional del acto reclamado, limitándose la autoridad responsable á suspender sus procedimientos sin devolver al quejoso sus efectos secuestrados, á lo que tambien se extiende el acto reclamado.

La Justicia federal, con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Carta federal de 5 de Febrero de 1857, y art. 12 fraccion 1ª de la ley de 20 de Enero de 1869, declara, 1º: Que ampara y protege á D. José Gomez contra los acuerdos del ayuntamiento de Huajuapam de 5 de Octubre y 9 de Noviembre últimos, por los que se impuso contribucion ó arbitrio municipal á las matanzas de ganado que se verificaron en su hacienda del Potrero, jurisdiccion de S. Sebastian Progreso, y contra los actos coactivos sobre pago de la suma de cuatrocientos cuarenta y nueve pesos cuarenta y dos centavos que se le exigen por ese impuesto, por haberse violado las garantías de los artículos 4, 16 y 27 de la Constitucion. 2º: No le ampara ni protege contra la preten-

da violacion del artículo 14 del mismo Código.

Hágase saber; séquense copias de este fallo para su publicacion en el Diario Oficial, Semanario Judicial de la Federacion y Regenerador del Estado; líbrense órdenes para la devolucion de los efectos embargados al quejoso, con fianza á lo mandado en autos de 6 de Enero último, y dévese este juicio á la Corte Suprema de Justicia para su revision, reponiéndose el papel comun de las fojas 51 y siguientes, con el del sello correspondiente.

El C. Lic. Rodolfo Sandoval, Juez interino de Distrito, así lo sentenció, mandó y firmó. Hoy fé.—*Rodolfo Sandoval.*—*Manuel Galindo*, secretario.

Es copia de su original que certifico.
Oaxaca de Juarez, Marzo 28 de 1874.
—*Manuel Galindo*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril 20 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. español José Gomez, vecino de Huajuapam de Leon, ante el Juzgado de Distrito del Estado de Oaxaca, contra las disposiciones de la autoridad de la ciudad de Villa, con cuya ejecucion se han violado las garantías individuales consignadas en los arts. 4, 14, 16 y 27 del Pacto federal; visto el informe de la autoridad responsable; lo al gale y probado por el solicitante el parecer fiscal, la sentencia del inferior, y considerando: que los hechos probados en los autos, son los siguientes: que la municipalidad de Huajuapam decretó un impuesto sobre las matanzas que se hicieran en terrenos del Municipio; que despues dispuso que el cobro de este impuesto se hiciera efectivo aun sobre el ganado que se matara fuera del municipio; que el mismo dia que se publicó este segundo acuerdo, el solicitante hizo matar varias reses de su propiedad en una de sus

ánegas situada dentro de los límites del municipio de S. Sebastian Progreso; que para hacer efectivo el pago del impuesto mencionado, ha embargado la autoridad municipal de Huajuapam varios efectos al solicitante; que de la esposicion de estos hechos, se infiere que el primer acuerdo fué publicado con anterioridad al hecho que motivó este recurso, que no fue variado por el segundo en lo sustancial; que este acuerdo no puede tener val r alguno fuera de la jurisdiccion del municipio de Huajuapam; que con intentar ejecutarlo en otro municipio, se ha violado una de las garantías consignadas en el art. 16 de la Constitucion, por ser incompetente, en el caso, el Ayuntamiento contra cuyas disposiciones se solicita el amparo.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitucion, se decreta: que es de confirmarse y se confirma en todas sus partes y por sus propios legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito que ampara al C. español José Gomez.

Devuélvase los autos al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el To- ca. Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Abril 29 de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Norte de Tamaulipas por el Administrador de la Aduana fronteriza de Reynosa, C. Juan M. Gonzalez, por sí, y como personero del Comandante y Celadores de aquel Resguardo, por violacion de garantías.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

II. Matamoros, Febrero 20 de 1874.—Visto el presente juicio de amparo promovido por el Administrador de la Aduana fronteriza de Reynosa, C. Juan M. Gonzalez, por sí y como personero del Comandante y Celadores de aquel Resguardo, CC. Ignacio Laras, Victoriano Dávalos, Mariano Cedillo y Alejo Vanegas, contra el acto del comisionado de las Agencias fiscales de las Villas del Norte, C. Rafael Zúñiga, que los requirió por adeudo de contribuciones sobre sus sueldos como empleados de la federacion, y por cuotas de excepciones del servicio en la Guardia Nacional, impuestas por leyes del Estado, con lo que reputan violadas sus garantías individuales, é invadida la esfera de la autoridad federal. Vistos, el poder de fojas seis que el promovente exhibió para acreditar su personalidad, sustituyéndolo luego en el C. Guadalupe Fernandez; el auto de fojas 3 vuelta, decretando la inmediata suspension del acto reclamado; el informe constante á fojas 28 vuelta, de la autoridad ejecutiva; lo pedido por el Ministerio público; el alegato de la parte actora, y

Considerando: que por el art. 117 de la Constitucion de la República, solo “se entienden reservadas á los Estados aquellas facultades que no le estan expresamente concedidas en el propio Código á los funcionarios federales.”

Que el disminuir las dotaciones de los empleos públicos de la federacion, es facultad concedida al Congreso, expresa en la fraccion undécima del art. 72 de la citada